



**Resolución No. CSJBOR25-1057**  
**Cartagena de Indias D.T. y C., 22 de julio de 2025**

*“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”*

**Vigilancia judicial administrativa:** 13001-11-01-002-2025-00584-00

**Solicitante:** Jenny Alexandra Díaz Vera

**Despacho:** Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena

**Servidor judicial:** Mauricio González Marrugo y Connie Paola Romero Juan

**Tipo de proceso:** Ejecutivo

**Radicado:** 13001400301320230104800

**Consejero ponente:** Iván Eduardo Latorre Gamboa

**Fecha de sesión:** 22 de julio de 2025

## I. ANTECEDENTES

### I.1 Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos del 9 de julio de 2025, la abogada Jenny Alexandra Díaz Vera, apoderada de la parte demandante, solicitó que se ejerciera vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con el radicado núm. 13001400301320230104800, que cursa en el Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena, debido a que, según indicó, se encontraba pendiente de pronunciarse sobre la subsanación de la demanda presentada el 31 de mayo de 2024.

### I.2 Trámite vigilancia judicial administrativa

Mediante Auto CSJBOAVJ25-646 del 11 de julio de 2025, comunicado el mismo día, se dispuso requerir a los doctores Mauricio González Marrugo y Connie Paola Romero Juan, juez y secretaria, respectivamente, del Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena, para que suministraran información detallada del proceso identificado con radicado núm. 13001400301320230104800. Esto, porque al revisar el expediente en el aplicativo TYBA de la Rama Judicial se observó que no se encuentra disponible para su consulta.

### I.3 Informe de verificación

Dentro de la oportunidad para ello, la doctora Connie Paola Romero Juan, secretaria del Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena, rindió informe bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo PSAA11-8716 de 2011).

La servidora judicial informó que la demanda fue asignada por reparto del 27 de Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.  
Teléfono: 3102382301. [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)  
Correo electrónico: [mecsjsbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:mecsjsbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Cartagena – Bolívar. Colombia

noviembre de 2023 y fue pasada al despacho el mismo día.

Por auto del 28 de mayo de 2024 se dispuso la inadmisión de la demanda y el 31 de mayo siguiente se recibió la subsanación, escrito que fue pasado al despacho el 4 de junio siguiente.

Que los días 19 de julio, 12 de septiembre 4 de octubre y 15 de noviembre de 2024, así como los días 24 de abril y 6 de mayo de 2025, la parte interesada presentó solicitudes de impulso procesal sobre la calificación de la demanda, memoriales que fueron debidamente pasados al despacho.

Que por auto del 10 de julio de 2025 se dispuso librar mandamiento de pago y decretar medidas cautelares, por lo que la situación de mora alegada por la quejosa se encuentra normalizada.

Además, que dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 109 del Código General del Proceso y que la actuación pendiente, la sustanciación del asunto, le correspondía a los doctores Margarita Contreras Aguilar y Mauricio González Marrugo.

Por su parte, el doctor Mauricio González Marrugo, juez, guardó silencio frente al requerimiento realizado por este Consejo Seccional.

## II. CONSIDERACIONES

### 2.1 Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la abogada Jenny Alexandra Díaz Vera, dentro del proceso de la referencia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la solicitud se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

### 2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: i) cuestiones de

incumplimiento de términos actuales, porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

### **2.3. Planteamiento del problema a resolver**

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por la servidora judicial, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que sean contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que la solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra los servidores judiciales involucrados.

### **2.4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas**

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8°, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona *“a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)”*.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, lo cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a continuación: i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada “(...) *pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular*”, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que “*el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general, contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales*”. En ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto “*la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia*”.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

*«La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.*

*(...)*

*Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).*

*Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen*

*de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.*

*(...)*

*En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley ”»*

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado ha expresado: *“(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si, por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es celeré y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”.*

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada, es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el caso concreto, *“juicio ciertamente complejo en el que “deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”.*

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente, que de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus

obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”*.

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

*“(...) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.*

*Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas”.*

Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias del despacho, así como la gestión del servidor judicial. Entre esos aspectos, la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término perentorio e improrrogable, la existencia de razones no solo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho *“se exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese determinado momento (...)”*.

## **2.5 Caso concreto**

La abogada Jenny Alexandra Díaz Vera, apoderada de la parte demandante, solicitó que se ejerciera vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con el radicado núm. 13001400301320230104800, que cursa en el Juzgado 13º Civil Municipal de

Cartagena, debido a que, según indicó, se encontraba pendiente de pronunciarse sobre la subsanación de la demanda presentada el 31 de mayo de 2024.

Respecto de las alegaciones de la solicitante, la doctora Connie Paola Romero Juan, secretaria del Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena, informó que por auto del 10 de julio de 2025 se resolvió lo correspondiente. La servidora judicial relacionó los memoriales allegados por la quejosa e indicó las fechas en las que realizó los pases al despacho.

Examinadas la solicitud de vigilancia judicial administrativa, el informe de verificación rendido bajo la gravedad de juramento y demás piezas obrantes en el expediente digital, esta Seccional encuentra demostrado que en el trámite del proceso se surtieron las siguientes actuaciones:

<b>No.</b>	<b>Actuación</b>	<b>Fecha</b>
1	Reparto de la demanda	27/11/2023
2	Ingreso al despacho	27/11/2023
3	Solicitud de impulso procesal	15/05/2024
4	Ingreso al despacho	17/05/2024
5	Auto mediante el cual se inadmitió la demanda	28/05/2024
6	Subsanación de la demanda	31/05/2024
8	Ingreso al despacho	04/06/2024
9	Solicitud de impulso procesal	19/07/2024
10	Ingreso al despacho	22/07/2024
11	Solicitud de impulso procesal	12/09/2024
12	Ingreso al despacho	13/09/2024
13	Solicitud de impulso procesal	04/10/2024
14	Ingreso al despacho	07/10/2024
15	Solicitud de impulso procesal	15/11/2024
16	Ingreso al despacho	18/11/2024
17	Solicitud de impulso procesal	24/04/2025
18	Ingreso al despacho	25/04/2025
19	Solicitud de impulso procesal	06/05/2025

20	Ingreso al despacho	07/05/2025
21	Auto mediante el cual se libró mandamiento de pago	10/07/2025
22	Comunicación del requerimiento de informe dentro del trámite de la vigilancia judicial administrativa	11/07/2025

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe a la presunta mora en la que está incurso el Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena, en pronunciarse sobre la subsanación de la demanda presentada el 31 de mayo de 2024.

Con relación a lo alegado por la quejosa, al revisar los informes de verificación, se tiene que por auto del 10 de julio de 2025 se resolvió librar mandamiento de pago. Esto, con anterioridad a la comunicación del requerimiento de informe realizada por este Consejo Seccional el 11 de julio del año en curso, dentro del trámite de la solicitud de vigilancia judicial administrativa. Por lo que, bajo ese entendido, no hay lugar a una situación de mora judicial actual que requiera ser verificada por este Consejo Seccional.

Lo anterior, impide seguir adelante con este trámite, pues de los artículos 1° y 6° del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, “*por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996*”, se infiere razonablemente que la finalidad de esta actuación administrativa es procurar por la eficiente prestación del servicio de administración de justicia para casos de sucesos de mora presentes, no en los pasados. Así, será del caso ordenar el archivo del presente trámite administrativo respecto de los servidores judiciales involucrados, por cuanto se trata de hechos pasados.

En cuanto a las actuaciones desplegadas por la secretaría de la agencia judicial, se advierte que los memoriales allegados al proceso han sido ingresados al despacho de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código General del Proceso, a saber:

*“ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia (...).”*

Con relación a las actuaciones surtidas por el señor juez, se tiene que: (i) entre el reparto de la demanda el 27 de noviembre de 2023, y el auto mediante el cual se inadmitió la

demanda el 28 de mayo de 2024, transcurrieron seis meses; (ii) entre el ingreso al despacho de la subsanación de la demanda el 31 de mayo de 2024 y el auto por el cual se libró mandamiento de pago el 10 de julio de 2025, transcurrieron 14 meses, términos que exceden el previsto en el artículo 90 del Código General del Proceso, a saber:

*“ARTÍCULO 90. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.*

*(...)*

*En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda (...).”*

De lo anterior, se advierte que pese a los sendos memoriales de impulso procesal presentados luego de haber sido allegada la subsanación de la demanda, el proceso se mantuvo inactivo por 14 meses, término que excede los plazos razonables.

Aunque esta Corporación conoce que el juzgado maneja un inventario actual que asciende a 811 procesos activos con trámite, no puede omitir que desde el reparto de la demanda hasta la calificación de la misma transcurrieron 20 meses, pese a obrar seis solicitudes de impulso procesal, las cuales fueron debidamente pasadas al despacho.

Si bien la secretaria en el informe de verificación expuso que el proceso lo tenía asignado para su trámite la doctora Margarita Contreras Aguilar, escribiente, de lo que se advierte una omisión por parte de la empleada, dado que la sustanciación del asunto estaba a su cargo, ello no exime al juez de cumplir a cabalidad con el deber legal impuesto en el citado artículo de 120 del Código General del Proceso, máxime al evidenciar que con la omisión en pronunciarse sobre lo correspondiente incurrió en un incumplimiento de los deberes dispuestos en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 76 de la Ley 2430 de 2024, a saber:

*“(...) ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:*

- 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.*
- 2. Desempeñar con autonomía, independencia, transparencia, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo.*

(...)

6. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder por el uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados.

(...)

16. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional (...)."

Lo anterior, aunado al deber legal de impulsar los procesos que tiene a su cargo, dispuesto en el artículo 8° del Código General del Proceso, a saber:

*“ARTÍCULO 8o. INICIACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.*

*Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya”.* (Subrayado fuera del texto original)

Adicionalmente, al realizar un estudio de las actuaciones publicadas por la célula judicial en el micrositio de la página de la Rama Judicial, se observó que el despacho se pronunció sobre procesos que estaban pendientes por ser admitidos o inadmitidos, cuyo consecutivo de radicado y fecha de reparto es posterior a la del proceso ejecutivo bajo estudio identificado con el radicado núm. 13001400301320230104800. Se ponen como ejemplos los procesos identificados con los radicado núm. 13001400301320250025100 y 13001400301320250024300.

En el proceso de solicitud de aprehensión por garantía mobiliaria, identificado con el radicado 13001400301320250025100, se tiene que el radicado es posterior al del caso bajo estudio, y por auto del 8 de julio de 2025, publicado en estado del 9 de julio siguiente, se inadmitió la demanda:

RAD: 13-001-40-03-013-2025-00251-00.

Asunto: SOLICITUD DE APREHENSION Y ENTREGA DE GARANTIA MOBILIARIA DE VEHICULO AUTOMOTOR DE PLACAS **EGR-279**.

Acreedor: GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

Garante: YISELA PAOLA MENDEZ.

JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS. Cartagena de Indias, julio ocho (8) de dos mil veinticinco (2.025).

Al despacho se encuentra la presente solicitud de **APREHENSION Y ENTREGA DE GARANTIA MOBILIARIA DEL VEHICULO DE PLACAS EGR-279**, promovida por la Acreedora **GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO**, contra la Garante **YISELA PAOLA MENDEZ**, para decidir si se admite o no.



**PUBLICO**

Juzgado Municipal - Civil 013 Cartagena

Estado No. 114 De Miércoles, 9 De Julio De 2025

FIJACIÓN DE ESTADOS					
Radicación	Clase	Demandante	Demandado	Fecha Auto	Auto / Anotación
13001400301320190027500	Ejecutivo	Itau Corpbanca Colombia S.A.	Diego Ricardo Lozano Perez	08/07/2025	Auto Decide Liquidación De Costas
13001400301320230052000	Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantía	Aguas De Cartagena - Acucar S.A. E.S.P.	Centro Comercial El Cañonazo	08/07/2025	Auto Rechaza
13001400301320250015100	Procesos Ejecutivos	Pra Group Colombia Holding S.A.S.	William Saer Daccarett	08/07/2025	Auto Libra Mandamiento Ejecutivo-Pago
13001400301320250025100	Otros Procesos	Gm Financiamiento Colombia S.A. Compañia De Financiamiento	Yisella Paola Mendez Orozco	08/07/2025	Auto Inadmitir - Auto No Avoca

Así mismo, dentro del proceso verbal identificado con radicado núm. 13001400301320250024300, cuyo radicado es posterior al del proceso bajo estudio, por auto del 13 de junio de 2025, publicado en estado del 16 del mismo mes, se dispuso admitir la demanda:

RAD: 13-001-40-03-013-2025-00243-00.  
PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE MENOR CUANTIA.  
DEMANDANTE: JUAN VICENTE CORDOBA TORRES.  
DEMANDADOS: RICARDO ESCUDERO ALVAREZ Y COMPAÑIA DE SEGUROS – SURAMERICANA.

JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS, Cartagena de Indias, junio trece (13) de dos mil veinticinco (2.025).

Al despacho se encuentra la demanda VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE MENOR CUANTIA, promovida por el demandante JUAN VICENTE CORDOBA TORRES quien actúa por interpuesto vocero judicial, contra RICARDO ESCUDERO ALVAREZ y COMPAÑIA DE SEGUROS – SURAMERICANA., para efectos de decidir si se admite o no.



Juzgado Municipal - Civil 013 Cartagena  
Estado No. 99 De Lunes, 16 De Junio De 2025



FIJACIÓN DE ESTADOS					
Radicación	Clase	Demandante	Demandado	Fecha Auto	Auto / Anotación
13001400301320250012200	Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia	Banco Davivienda S.A -	Deisis Sierra Julio	13/06/2025	Auto Decide
13001400301320250024300	Verbales De Menor Cuantia	Juan Vicente Cordoba Torres	Compañia Suramericana De Seguros, Ricardo Escudero Alvarez	13/06/2025	Auto Inadmite - Auto No Avoca

Lo anterior permite colegir, que el funcionario judicial, además de haber presentado una tardanza para pronunciarse sobre la admisión de la demanda, también incurre en una presunta infracción respecto del deber consagrado en el numeral 13 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019<sup>1</sup>.

Frente a lo evidenciado, la Corte Constitucional se pronunció mediante Sentencia T-708 de 2006, en los siguientes términos:

*“(...) Esa disposición comporta, de manera general, la existencia de un derecho para todas las personas con asuntos pendientes ante la jurisdicción de que los mismos sean resueltos respetando estrictamente el orden establecido en la ley, pero no consagra un derecho procesal que habilite a las partes a solicitar la alteración del turno en un determinado negocio (...).”*

Lo cual se entiende como una interpretación extensiva a los trámites judiciales, de lo reglamentado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

**“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los**

*Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.*

*La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden”.*

Conducta que además, resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024, por el cual se modificó el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, a saber:

*“ARTÍCULO 26. Modifíquese el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:*

*ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. Los despachos judiciales tramitarán y fallarán los procesos sometidos a su conocimiento con sujeción al orden cronológico de turnos (...).”*

Así las cosas, comoquiera que en el proceso de marras se advirtieron hechos constitutivos de una posible falta disciplinaria, será del caso ordenar la compulsión de copias con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que investigue las conductas desplegadas por los doctores Mauricio González Marrugo y Margarita Contreras Aguilar, juez y escribiente, respectivamente, del Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena.

Adicionalmente, se exhortará al doctor Mauricio González Marrugo, Juez 13° Civil Municipal de Cartagena, para que, sin pretender amenazar los principios de autonomía e independencia de los que goza, adopte medidas encaminadas a garantizar la celeridad y debido impulso de los procesos; así mismo, disminuir los tiempos de respuesta del despacho.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

### **III. RESUELVE**

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.  
Teléfono: 3102382301. [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)  
Correo electrónico: [mecsjbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:mecsjbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Cartagena – Bolívar. Colombia

**PRIMERO:** Archivar la vigilancia judicial administrativa promovida por la abogada Jenny Alexandra Díaz Vera, apoderada de la parte demandante, sobre el proceso identificado con el radicado núm. 13001400301320230104800, que cursa en el Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena, por las razones anotadas.

**SEGUNDO:** Compulsar copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que, en atención a lo consignado, investigue las conductas desplegadas por los doctores Mauricio González Marrugo y Margarita Contreras Aguilar, juez y escribiente, respectivamente, del Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena, en el trámite del proceso de marras, conforme al ámbito de su competencia.

**TERCERO:** Exhortar al doctor Mauricio González Marrugo, Juez 13° Civil Municipal de Cartagena, para que, sin pretender amenazar los principios de autonomía e independencia de los que goza, adopte medidas encaminadas a garantizar la celeridad y debido impulso de los procesos, así como disminuir los tiempos de respuesta del despacho.

**CUARTO:** Comunicar la presente decisión a los doctores Mauricio González y Connie Paola Romero Juan, juez y secretaria, respectivamente, del Juzgado 13° Civil Municipal de Cartagena, así como a la solicitante.

**QUINTO:** Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

### **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**IVÁN EDUARDO LATORRE GAMBOA**  
Presidente

CP. IELG/MFLH